

¿Quiénes somos?

● El Comité Obrero Internacional contra la guerra y la explotación y el trabajo precario, por La Internacional Obrera (COI) fue constituido durante la Conferencia Mundial de Mumbai (India) el 19, 20 y 21 noviembre de 2016 reuniendo a delegados de 28 países.

● El COI fue constituido en base al Manifiesto de Mumbai contra la guerra, la explotación y el trabajo precario, manifiesto que ha recibido ha recibido la adhesiones de militantes obreros y responsables de organizaciones políticas y sindicales de 46 países (*)

- Su comité de seguimiento está compuesto por militantes obreros de toda tendencia:
- Innocent Assogba** (Benin)
 - Alan Benjamin** (Estados Unidos)
 - Colia Clark** (Estados Unidos)
 - Constantin Cretan** (Rumania)
 - Berthony Dupont** (Haití)
 - Ney Ferreira** (Brasil)
 - Daniel Gluckstein** (Francia)
 - Rubina Jamil** (Pakistán)
 - Apo Leung** (China)
 - M.A. Patil** (India)
 - Mandlenkosi Phangwa** (Azania)
 - Sergio Pineda** (México)
 - Klaus Schüller** (Alemania)
 - Jung Sikhwa** (Corea)
 - John Sweeney** (Grand Bretaña)
 - Mark Vassilev** (Rusia)
 - Nambiath Vasudevan** (India)

(*) Afganistán, Azania, Alemania, Argentina, Austria, Bangladesh, Bélgica, Benin, Bielorrusia, Brasil, Burundi, Canadá, Chile, China, Corea, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Gran Bretaña, Grecia, Haití, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Italia, Mali, México, Pakistán, Perú, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Ruanda, Senegal, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela. Zimbabue.

El 2 de octubre el Comité Obrero Internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional Obrera propuso a la organización una encuesta obrera internacional concerniendo las consecuencias, para los trabajadores, de la pandemia de Covid 19. Esto en relación con la política de los gobiernos y las posiciones del movimiento obrero en cada país.

Fue elaborado un cuestionario de 8 puntos (publicado en la *Carta de Información* COI n°164, cuestionario que está a disposición sobre pedido).

Esta encuesta contribuirá a la preparación de la Segunda Conferencia Internacional contra la guerra y la explotación por la Internacional Obrera que tendrá lugar en 2021.

Publicamos la primera respuesta a esta encuesta

Informe n° 1

PAKISTÁN

Autor: All Pakistan Trade Union Federation (APTUF), con fecha del 5 de octubre de 2020.

Ataques brutales de capitalistas y el gobierno procapitalista contra la clase obrera

El partido gobernante, el PTI (Movimiento por la Justicia de Pakistán) tomó el poder con sus aliados cercanos, las fuerzas armadas de Pakistán y también algunos grupos extremistas. Con la ayuda del ejército paquistaní pudo ganar las elecciones, manipular los votos, encarcelar a todos los oponentes, ya fueran de la PML-N (Liga Musulmana de Pakistán) o del PPP (Partido Popular de Pakistán). La agencia gubernamental NAB (Oficina Nacional de Responsabilidad) se ha puesto a trabajar diligentemente para arrestar a figuras políticas y ponerlas en la cárcel bajo su propia vigilancia, los juicios han comenzado, pero no terminarán hasta que los políticos hayan aceptado que no hay prueba de culpabilidad o razón para encarcelarlos bajo la autoridad de la agencia NAB.

Pakistán se encuentra en medio de una tormenta política luego de que la mayoría de los principales partidos de oposición exigieran que los poderosos generales del país renunciaran a su poder hegemónico sobre la política y retiraran su apoyo al gobierno del primer ministro Imran Khan, que la oposición prometió derrocar gracias a la agitación en la calle.

El nuevo Movimiento Democrático de Pakistán (PDM) anunció que lanzará una campaña de protesta a nivel nacional el 11 de octubre, ahora pospuesta al 18 de octubre. El anuncio se produjo un día después de un enfrentamiento particularmente rudo entre el gobierno y la oposición tras el arresto del líder de la oposición Shehbaz Sharif acusado

de lavado de dinero sucio, una acusación que, según él, responde a razones políticas. El mismo día, Asif Ali Zardani, ex presidente y líder del PPP (Partido Popular de Pakistán), también estuvo involucrado en otro caso de lavado de dinero sucio. El Partido Nacional Awami en la provincia de KPK (Khyber Pakhtunkhwa) no dijo nada porque durante las elecciones y antes de las elecciones, los verdaderos portavoces del partido murieron en ataques terroristas.

La élite gobernante, apoyada en gran parte por el jefe de las fuerzas armadas, se ajusta a las políticas imperialistas y capitalistas, sin preocuparse del sufrimiento del pueblo. La inflación aumenta día a día, al igual que la tasa de suicidios y delitos. El pueblo y la clase obrera no pueden obtener víveres básicos.

El sectarismo y el extremismo están en aumento: recientemente en Karachi, los sunitas realizaron una manifestación de protesta contra una comunidad chiita. Con la ayuda de los militares, el gobierno constantemente pone al movimiento popular la espalda contra la pared. Los partidos de oposición e incluso los llamados partidos de izquierda no juegan un papel importante en esta terrible situación política mientras no se haga nada para dar una solución a los males que sufren los trabajadores y las masas pobres.

La situación actual en todo el mundo es realmente la peor, ya que los trabajadores, las mujeres y los jóvenes continúan enfrentando las dificultades creadas por los capitalistas y

los gobiernos capitalistas en todo el mundo y, por supuesto, también en Pakistán. La pandemia de coronavirus es, en esencia, una crisis sanitaria mundial, pero tiene diferentes repercusiones según el país. Debido al coronavirus, el curso normal de las cosas ha cambiado; el virus destaca de manera inimaginable y aterradora las desigualdades sociales y económicas estructurales.

Con la pandemia, en Pakistán, los capitalistas aliados con los gobernantes pusieron en marcha procedimientos particularmente duros para los trabajadores, no solamente en el sector privado, en las multinacionales sino también en las empresas estatales. El sector de la confección, donde trabaja la mayoría de mujeres que no están sindicalizadas, ha sido golpeado por el coronavirus, y con frecuencia hemos visto el efecto de los despidos; empleados, trabajadores precarios, trabajadores contratados por día, sin paga. Se ha observado que el daño causado a la clase obrera antes y después del coronavirus está en su punto máximo. Este gobierno procapitalista anunció un programa de registro y apoyo financiero para los trabajadores, pero los que son la columna vertebral de cualquier nación no han recibido salario, no se ha tomado ninguna acción por parte del primer ministro que apoya a

los militares.

Desde la creación de Pakistán hace 73 años, son gobiernos procapitalistas y proimperialistas los que gobiernan en Pakistán, que dependen de las políticas imperialistas. Incluso el proceso de elaboración del presupuesto se termina con el FMI y el Banco Mundial acumulando sanciones, imponiendo límites a quienes nos gobiernan, por aumentar el precio de la gasolina, las medicinas, los productos de necesidad básica que son inaccesibles para el común de mortales. Nuestra economía está aplastada por la deuda, sujeta a la hipoteca de los jóvenes desempleados y un sistema de salud ya saturado, la pandemia sin duda causará estragos en la población. En 2019, de los 220 millones de paquistaníes, el 24,5 % vivía por debajo del umbral de pobreza. La pandemia está arrastrando a millones más a la miseria y podemos predecir que la tasa de pobreza llegará al 33,7 %, si el impacto no es demasiado fuerte, pero en el peor de los casos, es probable que la tasa alcance el 58,6 %. Debido al coronavirus, las empresas han debido cerrar y las empresas se han visto gravemente afectadas. Se han cerrado todos los establecimientos escolares, los maestros, los trabajadores de la salud, la clase obrera, los trabajadores domésticos, los trabajadores con contratos

precarios, los jornaleros y los jóvenes se quedaron en casa, sin salario a pesar de que el gobierno había anunciado que, si los patrones no pagaban los salarios de los empleados, los patrones deberían que pagar multas. Lamentablemente los empresarios, los capitalistas tienen estrechos vínculos con los políticos, son ladrones que dan sobornos a los parlamentarios para financiar sus campañas electorales, por lo que ninguna autoridad ha obligado a pagar multas a los dueños de las empresas.

La clase obrera, incluidos maestros, oficinistas, quienes trabajan en ferrocarriles, bancos, Pakistan Airlines, servicios de agua y energía (WAPDA), en los servicios del Ministerio de Trabajo, en Correos, en los astilleros, todos los empleados corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, especialmente los que trabajan en la industria de la confección donde los contratistas han puesto fin a su pedidos y miles de mujeres han perdido sus trabajos. No hay sindicato en la industria de la confección. Las que trabajan en su domicilio, los trabajadores domésticos, los que trabajan en salud y los paramédicos enfrentan grandes problemas. En Pakistán, hemos visto despidos masivos que han provocado enormes pérdidas de puestos de trabajo aproximadamente de 21 millones de trabajadores.



Trabajadores del sector textil en la confección americana, en huelga a Lahore

Toda la actividad se detuvo durante la epidemia. El ejemplo más significativo es el de la industria textil y de la confección, que emplea al 45% de la mano de obra industrial total del país. La mayoría de los empleados fueron despedidos de forma permanente, mientras que a otros se les informó que sus trabajos fueron suspendidos temporalmente y se retendrían los salarios que se les adeudaban. El desempleo se ha visto incrementado por el hecho de que las principales

cadenas mundiales de ropa han cancelado sus pedidos, incluso de productos ya fabricados. Sin embargo, el meollo del asunto es que el gobierno no hizo cumplir el Código del Trabajo y no proporcionó a los trabajadores una protección legal adecuada.

80% de las fábricas de la industria de la confección no están registradas oficialmente. El 85% de los que laboran en estas fábricas son contratados indirectamente a través de agencias de contratación sin contrato de trabajo, lo

que les priva de cualquier protección vinculada a su situación por no estar registrados en las instituciones provinciales de seguridad social. Además, además de sus salarios de pobreza, muchos no reciben ayuda de licencia por enfermedad, seguro médico o protección en el trabajo, lo que los deja particularmente vulnerables en caso de reducción de la carga de actividad.

Son las trabajadoras las que se ven desproporcionadamente afectadas por

la situación de reducción de la actividad económica, especialmente las que trabajan en su domicilio o como empleadas domésticas y que suelen ser "invisibles" en este sistema de "economía informal". Desde el anuncio del confinamiento la mayoría de las trabajadoras domésticas fueron despedidas y obligadas a abandonar el domicilio de sus patrones y frecuentemente sin recibir ningún salario. Muchas de ellas eran trabajadoras migrantes provenientes de pueblos alejados. Por otro lado, las trabajadoras en su domicilio están adscritas al sector económico a través de un intermediario que les proporciona el trabajo a realizar para las industrias (*). Con el cierre de industrias y el cierre del transporte, este vínculo entre trabajadoras en su domicilio y fábricas se ha roto porque los intermediarios ya no pueden llegar a ellas. La situación de las trabajadoras de las fábricas no es mejor. Solamente el 4 % de ellas están sindicalizadas y

los salarios del 93 % de ellas son inferiores al salario mínimo que es de 17 000 rupias (es decir cien euros, o 117 dólares estadounidenses).

El gobierno procapitalista trata de consolidar el programa de seguridad social creando un fondo de apoyo para los trabajadores con el objeto de ayudar a los jornaleros y desocupados, pero este tipo de programa es inaccesible para la mayoría de los trabajadores. Por ejemplo, del 31% de mujeres que han perdido su empleo, la mayoría de ellas no sabe si debe o no registrarse en la seguridad social. Estos trabajadores no están sindicalizados.

Tras siete semanas de confinamiento, el gobierno ha autorizado a muchos sectores de la economía a reanudar su actividad, por ejemplo, el del textil, de la construcción, de la producción de fertilizantes, industrias químicas y pequeñas empresas, etc., con la condición de que todos observen las medi-

das de barrera y las medidas de seguridad prescritas por la Organización Mundial de la Salud. Y los capitalistas aprovecharon esta confusa situación para negociar con el gobierno nuevas disposiciones sobre derechos y obligaciones contractuales. Por ejemplo, cuando una fábrica reinicia actividades, es posible volver a contratar solamente a un pequeño número de empleados ya que las cadenas de pedidos internacionales se han interrumpido, estos empleados probablemente se verán obligados a aceptar salarios más bajos, jornadas laborales más largas sin que se tengan debidamente en cuenta las horas extraordinarias. Con el 80% de las fábricas sin registrar, las medidas de seguridad del trabajo son mucho menos estrictas y esto deja poco espacio para que el gobierno controle las condiciones de salud y seguridad que ponen en peligro la vida de estos trabajadores.

Con el pretexto de la corrupción, el gobierno procapitalista y proimperialista está cerrando instituciones favorables a los trabajadores.

Actualmente, con el pretexto de la corrupción, el gobierno ha detenido a algunos responsables y miembros del personal de la Asociación de Bienestar Social de los Trabajadores y ha cerrado esta institución que proporciona a los trabajadores ayudas económicas para matrimonios, funerales y becas de estudio y para el establecimiento de urbanizaciones de traba-

jadores en todo Pakistán. Se ha detenido toda la ayuda financiera.

Es el futuro de los hijos de los trabajadores lo que está en juego.

Lo mismo ocurre con la seguridad social y el EOBI (el fondo de pensiones e invalidez de los trabajadores).

Durante el período del coronavirus y hasta ahora los militantes han

sido muy activos, organizaron una reunión del grupo con trabajadores despedidos, incluidas mujeres que trabajan en la economía informal, trabajadoras domésticas y trabajadoras en su domicilio, los trabajadores de la salud con la consigna "*Seguridad social para todos, no a la privatización, sí a la seguridad del empleo*"

Los trabajadores de la salud combaten contra la privatización

Actualmente en Pakistán se está desarrollando un poderoso movimiento de trabajadores de la salud contra la privatización. El gobierno quiere privar a la clase obrera del derecho fundamental a la atención médica en un país donde ya más del 80 % de la población no tiene acceso a la atención médica más elemental. En lugar de construir nuevos hospitales públicos y aumentar los presupuestos de atención médica, el gobierno tiene la intención de deshacerse de los servicios de salud por completo y entregarlos al sector privado.

Esto significa que, en todo el país, cientos de miles de personas morirán por heridas leves y enfermedades curables por falta de atención. Tam-

bién significa que decenas de miles de trabajadores de la salud perderán su trabajo y su jubilación y serán condenados a una vida de extrema pobreza y miseria. Con la ausencia de partidos políticos que se opongan a la privatización y defiendan el derecho a la atención médica gratuita para todos, la situación ha empeorado considerablemente. Los militantes de la Sección y de la APTUF apoyan sin reservas el movimiento de protesta organizado por los trabajadores de la salud.

Ante esta catastrófica situación, los trabajadores de la salud de las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa se han sumado masivamente en un movimiento de oposición a esta draconiana medida del Estado paquistaní. El

Frente de Trabajadores Rojos, el APTUF / APWC están a la vanguardia de esta lucha y han contribuido al agrupamiento de varios sindicatos, asociaciones y grupos de trabajadores de la salud en el Punjab en la plataforma de la Gran Alianza para la Salud (GHA) para construir una lucha unida contra esta tiránica medida. Esta estrategia se retomó en PakhtunKhwá donde, de la misma forma, la GHA realiza la lucha contra el régimen actual.

Condiciones sanitarias en Pakistán

Con sus 220 millones de habitantes, Pakistán es uno de los países más pobres del mundo. Es uno de los más bajos en el Índice de Desarrollo Humano. Este es un ejemplo de pesadilla

de los horrores causados por el capitalismo y la explotación imperialista. Con una fisura cada vez mayor entre ricos y pobres, una infraestructura social y económica colapsada, el país es un infierno para la clase obrera. Más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. Aunque las masas experimentan sufrimiento en todas las áreas de su vida diaria, la mala calidad y la insuficiencia de atención médica es uno de los aspectos más difíciles de su existencia.

El país gasta menos del 2% de su PIB en salud y gran parte de este gasto está en el sector privado.

Esto no es un problema para los ricos y la clase media alta, ya que pueden pagar la costosa atención que ofrecen los hospitales privados similares a los hoteles de cinco estrellas; pero los pobres sufren y mueren sin atención en condiciones atroces. Para una población de 220 millones, el país sólo cuenta con 5.800 centros de salud elemental, 950 hospitales de atención secundaria y solamente 22 hospitales de atención terciaria en el sector público. Independientemente del nivel deplorable de su infraestructura, su número insuficiente ya dice mucho sobre la posibilidad de atención disponible.

La hospitalización pública sólo ofrece una cama para 2000 personas. Hay un médico por cada 1500 pacientes y esto es aún peor para la relación trabajador sanitario / paciente. El país tiene una de las tasas de mortalidad materno infantil más altas del mundo. Cada año, alrededor de medio millón de niños menores de cinco años mueren de enfermedades tratables como la disentería, la malaria, la fiebre tifoidea y las infecciones las vías respiratorias porque no tienen acceso a medicamentos, a una atención gratuita o asequible. Cada año, más de 50 000 mujeres mueren durante el parto, debido a la falta de instalaciones para la atención infantil y de la madre. Cada año, más de 40 000 mujeres mueren de cáncer de mama, poder pagar el costo del tratamiento es para ellas inimaginable. Más de 200 000 personas mueren cada año en accidentes de tráfico debido a la falta de hospitales. Y todo esto está sucediendo en un país donde las masas trabajadoras soportan una de las tasas de impuestos indirectos más altos y

donde alrededor del 75% del presupuesto federal anual está dedicado al servicio de la deuda y al armamento.

Privatización

El muy débil sistema de salud de Pakistán desde hace años se encuentra en una situación desastrosa como resultado de la falta de financiamiento del gobierno, pero, en el marco del programa de préstamos del FMI, el gobierno ahora está tratando de privatizar un sistema ya catastrófico para los pobres. Uno de los objetivos fundamentales de este intento de privatización iniciado por el FMI y el gobierno es la reducción del gasto estatal para lograr el saneamiento presupuestario.

Esto significa simplemente que el gobierno debe poder saldar su deuda y pagar sus intereses a sus acreedores nacionales e internacionales, y al mismo tiempo imponer su yugo a las masas trabajadoras. Además, se trata de proporcionar una salida rentable para la inversión de capital privado. Para privatizar los hospitales públicos, el gobierno propuso una ley draconiana llamada ley de Institutos de Educación Médica (MTI), que impuso en la provincia de Punjab mediante un decreto antidemocrático del gobernador. En la provincia de PakhtunKhwa (KPK), esta ley del MTI ya fue impuesta parcialmente en 2015 por el gobierno provincial entonces controlado por el PTI. Ahora, se aplica de manera similar al KPK y se extiende a los hospitales públicos a través de una reciente Ley de la Agencia Regional de Salud (RDHA).

Con estas leyes, los hospitales públicos perderán su condición de instituciones de asistencia pública para convertirse en empresas privadas que se encargarán de autofinanciarse eliminando la atención médica gratuita y utilizando los servicios de las compañías de seguros y de profesionales de salud privada. A tal efecto, la gestión de todos los hospitales públicos se delegará a compañías de seguros y proveedores de servicios privados. Además, el gobierno recibirá una parte de las ganancias obtenidas por estos hospitales subcontratados. Por un lado, estas brutales medidas de explotación capitalista privarán a millones de pobres del acceso a la atención sanitaria elemental (ya que dependen totalmente de estos hospitales públicos,

cuales sean sus deficiencias). Por otro lado, esta privatización significará la ruina financiera para los miles de jóvenes médicos, paramédicos y trabajadores hospitalarios que trabajan allí. La gran mayoría de ellos simplemente ya no tendrá trabajo. Los demás perderán su condición de empleados fijos, así como sus pensiones, y se convertirán en trabajadores contratados de forma temporal, pagados por jornada.

El movimiento contra la privatización

Fue en estas circunstancias que se desarrolló un poderoso movimiento de trabajadores de la salud del sector público en el Punjab y el KPK contra la privatización. Todas las asociaciones, todos los sindicatos de médicos jóvenes, personal de enfermería y trabajadores hospitalarios de estas dos provincias se han unido en una Gran Alianza por la Salud (GHA) para combatir concretamente esta ofensiva. Al principio hubo protestas en el borde de las carreteras, conferencias sobre la privatización y campañas de sensibilización. La GHA de las dos provincias se vio obligada entonces a convocar a una huelga en consultas externas, consultas radiológicas y laboratorios, ante las acciones represivas del gobierno, algunos trabajadores fueron brutalmente agredidos por la policía en el KPK. La huelga está en su día 32 en el KPK, su día 19 en el Punjab y sigue siendo muy fuerte a pesar de la represión del Estado, intimidación, arrestos, despidos y propaganda tóxica de los medios de comunicación bajo la influencia del Estado. Además de la huelga, en las últimas tres semanas se han producido grandes protestas en las principales ciudades de ambas provincias, en las que han participado miles de trabajadores de la salud, a pesar de la acción estatal. Después de fracasar en su intento de aplastar al movimiento utilizando la represión, el gobierno ahora está recurriendo a la vieja y pérfida táctica: tratar de romper la unidad de los trabajadores de la salud y engañar al movimiento con un simulacro de discusión. Pero los trabajadores se dan cuenta, por el momento, todas estas maniobras han fracasado.

Todo el tiempo a lo largo del movimiento, nos hemos mantenido al lado de los trabajadores de la salud.

Aumento de la violencia doméstica durante la epidemia de Covid-19

Las estadísticas indican un gran aumento en la violencia doméstica durante el encierro debido al Covid-19. Las cifras se basan en el número de llamadas recibidas por dos números de emergencia: uno de estos números recoge llamadas de todo el país excepto Lahore y las llamadas a Lahore se manejan por separado.

Las estadísticas muestran que 15 números de emergencia en Lahore recibieron 17.478 llamadas que informaban sobre violencia doméstica solamente durante el período de enero a mayo de 2020. En enero fueron 2096, 2360 en febrero y 2853 en marzo. El número de emergencia recibió 3079 llamadas en abril y 3090 en mayo. Las cifras muestran un aumento alarmante de la violencia doméstica durante la pandemia de Covid-19.

Estas estadísticas muestran un aumento del 32 % en las llamadas por violencia doméstica durante el confinamiento en las regiones. Se notificaron 2581 casos en el mes anterior al confinamiento (22 de febrero al 22 de marzo). Después de que se impuso el confinamiento, los informes llegaron a 3217 (entre el 23 de marzo y el 23 de abril). Durante el período de supresión parcial del confinamiento, el número de denuncias disminuyó un 10% (del 24 de abril al 23 de mayo) con 2889 casos.

Según la organización HRCP (Comisiones de Derechos Humanos de Pakistán), la forma más común de violencia doméstica es gritar y gritar (77 %), bofetadas (52 %), amenazas (49 %), empujones (47 %), puñetazos (40 %), patadas (40 %).

Una militante de la comisión de mujeres de la APTUF considera que estas cifras son bastante altas. Ella explica: "Durante la pandemia, los hombres están en casa y es muy peligroso que las mujeres llamen y busquen ayuda. En mi experiencia, las mujeres denuncian esta violencia por la noche o cuando los hombres no están en casa. Actualmente la mayoría de los servicios públicos no están funcionando adecuadamente, por lo que es muy difícil conocer las cifras exactas y el alcance de la naturaleza de estos delitos".

Además, ella agrega, las mujeres

con diferentes discapacidades se expondrían a un riesgo aún mayor si buscaran ayuda contra las violencias domésticas.

El Ministerio de Derechos Humanos ha lanzado una alerta Covid-19 que proporciona una línea directa, 1099, y un número de WhatsApp, 0333 908 5709, para reportar casos de violencia doméstica durante el confinamiento, sin embargo, este número gratuito solamente funciona a partir de las 10 a.m. a las 10 p.m. Durante la noche recibe un número muy reducido de llamadas de violencia doméstica en el país. Los números muestran que el número de llamadas se redujo de 3 a 1 por día.

La Comisión de Mujeres de la APTUF informa que los refugios para mujeres administrados por el Estado (Dar ul Amaan) en Punjab ya no pueden aceptar nuevas residentes. Esto se debe a la falta de recursos financieros, infraestructura y capacidad técnica que les impide recibir a las víctimas. Algunos de los albergues se han convertido en centros de cuarentena y por eso no pueden albergar a víctimas de violencia doméstica. La sede de la PCSW (Comisión de Punjab sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer) también está cerrada debido al confinamiento, pero su número de emergencia, 1043, funciona.

Es vital concentrar los esfuerzos para brindar mejores servicios a las mujeres que sufren violencia doméstica, dice la militante Khalida Ashraf. "En mi experiencia, cuando los servicios responden mejor a los problemas de las mujeres y son más accesibles, el número de llamadas aumenta considerablemente".

La violencia contra las mujeres aumenta constantemente en Pakistán. Rubina Jamil explica que Pakistán ocupa el sexto lugar como el país más peligroso para las mujeres después de ser tercero. Pakistán ocupa el cuarto lugar por discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo, acceso a recursos económicos como la propiedad de la tierra y también los riesgos que enfrentan las mujeres debido a las prácticas culturales, religiosas y tradicionales, incluido lo que estos se denominan "asesinatos por

honor". Pakistán ocupa el quinto lugar en violencia no sexual, incluida la violencia doméstica.

Las estadísticas del Banco Mundial muestran que casi una de cada tres mujeres casadas se queja de haber sido abusada por sus maridos. Las cifras no oficiales son mucho mayores. Para el año 2019, el archivo Mujeres, Paz y Seguridad ubicó a Pakistán en el puesto 164 de 167, solamente superado por Siria, Afganistán y Yemen, y en el último lugar entre los países del sur de Asia por acceso a teléfonos celulares, gestión financiera y discriminación contra la mujer.

"La violencia contra las mujeres es predominante y es más común que el compañero sea responsable de esta violencia" (APTUF y militante de la sección Samina Fayyaz). En emergencias como la pandemia de Covid-19, la violencia contra las mujeres tiende a aumentar.

"Pakistán es una sociedad excepcionalmente patriarcal y el asalto a las mujeres dentro del hogar es un problema social endémico. La violencia doméstica a menudo se considera un problema privado que se limita a la familia y no requiere una intervención adecuada. Lamentablemente, los valores sociales y culturales de nuestra sociedad también son una de las principales causas de la violencia doméstica contra la mujer".

Esto no es aceptable y esta violencia tiene efectos a largo plazo. Los riesgos de violencia contra las mujeres y sus hijos no deben pasarse por alto durante la crisis de la pandemia de Covid-19.

Desde que la 18ª Enmienda a la Constitución de 1973 otorgó poderes a las provincias, Punjab, Sindh y Baluchistán han instituido leyes que otorgan legalmente a las mujeres la igualdad con los hombres. Sindh aprobó su ley contra la violencia doméstica (Prevención y Protección) en 2013. Baluchistán aprobó una ley comparable en 2014.

El Punjab ha adoptado algunas medidas legales importantes en la dirección de los derechos de la mujer, incluida, en 2016, la Ley de Punjab de protección de la mujer contra la violencia; la Ley de Punjab de protección

de la mujer contra el acoso en el trabajo en 2012, la Comisión de Punjab sobre la condición jurídica y social de la mujer en 2014; la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia de Punjab, 2015, los Servicios de Protección de la Mujer de Punjab.

Desafortunadamente, actualmente no existe una ley en Khyber Pakhtunkhwa que proteja a quienes sobreviven a la violencia doméstica "debido a un revés impuesto por las autoridades religiosas", según un comunicado de 2020.

Hacer aprobar leyes que protegen a las mujeres lleva mucho tiempo. Las

leyes no tienen en cuenta los resultados de la seguridad de las mujeres. "Existen múltiples formas de violencia contra la mujer que implican riesgos a largo plazo para su salud y la de sus hijos. Desafortunadamente, muchos casos no se denuncian y de los que sí se denuncian, muchos no son objeto de proceso judicial".

El informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Pakistán) indica que solamente el 0,4 % de las mujeres van a los tribunales y el 50 % de las mujeres que sufren violencia doméstica no se dan a conocer.

"La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos sea cual sea el país, el momento o las circunstancias" "Nuestro Estado tiene serias dificultades para enfrentar estos hechos de violencia debido a la falta de coordinación entre los responsables y las autoridades públicas. Se llevan a cabo pocas campañas de información para eliminar los obstáculos sociales. Es realmente difícil obtener cifras precisas y, además, las autoridades públicas tienen recursos y capacidades limitados para enfrentar los problemas de violencia".